

La situación económica de la Comunitat y la invisibilidad coartan nuestra autonomía

MANUEL MIÑÉS MUÑOZ

DIRECTOR-GERENTE DE LA CÁMARA DE
CONTRATISTAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

Para infortunio y mayor desgracia de los valencianos, el hoy presidente en funciones Mariano Rajoy convocó las elecciones del 20-D sin resolver la nueva financiación de las comunidades autónomas. Tal ha sido su irresponsabilidad en este asunto, suma de cobardía y estulticia, para acometer los problemas internos –que no fueran los impuestos por Bruselas– que al poco de conocer el resultado electoral fuimos muchos los que presagiamos las graves tensiones territoriales que iba a generar un nuevo modelo de financiación autonómica ‘de novo’ ante un nuevo Gobierno central o coalición sin mayoría absoluta.

Quede claro que el actual sistema de financiación que tanto y durante tantos años nos viene perjudicando nació en 2002 con el Gobierno de Aznar y con Zaplana como presidente de la Generalitat. El reparto inicial fijado entre comunidades fue tan arbitrario que ya en 2008, último año de vigencia del ‘modelo Aznar’, según estudios del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, nos supuso una infrafinanciación de -1.654 millones de euros al año (recibíamos tan sólo el 87,7 % de la media de las comunidades autónomas).

El Gobierno de Rodríguez Zapatero en 2009, sin romper el statu quo de 2002, mejoró linealmente las transferencias a todas las regiones (alcanzábamos todavía el 91% de la media española). Además, admitió el PSOE una enmienda presentada en el Senado por el PP que supuso un incremento de 400 millones para favorecer la financiación en relación a la dispersión de la población y la baja densidad, favoreciendo con ello a Castilla y León, Galicia, Asturias, Cantabria, Rioja, Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura. Tampoco en aquella ocasión ni Rajoy como líder de la oposición ni Francisco Camps en la Generalitat hicieron nada por mejorar a Valencia.

Así llegamos a diciembre de 2014, en que venía el modelo actual de financiación de 2009, y Rajoy, tras cuatro años de gobierno con mayoría, falto de arrestos, no ha querido abordar su ‘actualización’ y ha preferido –vía pago a proveedores y vía FLA (Fondo de Liquidez Autonómica)– acudir en auxilio de la Comunitat Valenciana.

Los valencianos nos negamos a ser permanentemente una autonomía subvencionada a través del FLA y del Plan de Pago a Proveedores, fondo de liquidez del que hemos recibido, y debemos, hasta diciembre de 2015 unos 27.112 millones de euros. Queremos cañas para pescar, no que se nos regale el pescado. No queremos quedar como unos ‘mantenidos’ ante el resto de los españoles cuando lo que se nos da es lo que en justicia se nos debe. No se trata de hacer victimismo, y menos aceptamos que se nos tache de despilfarro por otras autonomías, ignorantes de nuestra realidad. Queremos justicia en la distribución de los impuestos que pagamos todos los españoles.

Finalizada la legislatura de Rajoy, la Comunitat ha alcanzado con los siguientes malos ratios. Ante una población del 10’68% del total nacional, nuestra riqueza sólo alcanzó el 9’35% del PIB nacional. La inversión regionalizada entre 2012 y 2015 su-

puso sólo el 6’89% del total nacional. La licitación de la Administración central en ese periodo supuso el 4’57% del total nacional. El PIB per cápita de la Comunitat, de 19.693 euros por habitante frente a los 22.412 de la media nacional. La deuda de 40.262 millones equivale a destinar en los Presupuestos de la Generalitat de 2016 unos 4.055 millones al servicio de la deuda (8.180 euros por valenciano) En el año pasado, por cada cien euros que gastó la Generalitat tuvimos que pedir prestados 27. Este, camino nos lleva a la quiebra.

Frente a este panorama nos encontramos con una financiación que apenas cubre el 80% de nuestros gastos sociales, y ello a pesar de nuestra eficiencia y mesura en atender a los servicios públicos fundamentales: Sanidad, Educación y Protección Social, en donde gastamos 5.710 euros por habitante y año, frente a una media nacional de 6.230. En los últimos doce años nos ha supuesto una infrafinanciación de -12.500 millones. Frente a una financiación media de 2.312 euros por habitante y año, Valencia ha recibido 2.102, por los 2.396 de Cataluña, 2.498 de Galicia, 2.554 de Castilla y León o 2.846 de Cantabria.

Ante tan reiterado trato discriminatorio, conviene recordar al prócer financiero valenciano Ignacio Villalonga: «La región valenciana debe ser un espacio en el que se afiance una sociedad civil autóctona fuerte, similar a la región vasca y Cataluña, capaz de defender con poder y determinación los intereses valencianos frente al centralismo impuesto por Madrid». Es necesario crear complicidades y presiones con las que romper la invisibilidad valenciana.

Debemos mandar a nuestros representantes en el Congreso y el Senado para que, por encima de la «obediencia al partido», se comprometan ante la sociedad civil valenciana, que les exigirá, y de ser necesario deberíamos salir pacíficamente a la calle a reivindicar nuestra autonomía financiera.

Exigir al nuevo Gobierno y a su Consejo de Política Fiscal y Financiera una financiación capaz de atender los servicios públicos fundamentales con igualdad de ratios que el resto de los españoles.

Mutualizar la deuda de la Comunitat Valenciana tras una ‘quita consensuada’ (hay precedentes en otras comunidades autónomas) e ir a una solución semejante al Plan Hamilton (que asumió el Tesoro del primer gobierno constitucional de EE UU, tras la guerra de Secesión de 1790 y quiebra de gran parte de los estados confederados)

Convenir igualmente con el próximo Gobierno central un plan decenal (2016-2025) para dotarnos de unas inversiones, sostenibles en el tiempo, para infraestructuras productivas en transportes, logística e intermodalidad viarias, ferroviarias, hidráulicas e infraestructuras sociales (Educación, Sanidad, Dependencia y Regeneración Urbana). Lograr que los actuales 7.000 millones de déficit que arrastramos en inversión en infraestructuras (2000-2015) desaparezcan en diez años y atraer inversiones presupuestarias que en no menos de un 50 % estarían ‘incentivadas’ por una imprescindible colaboración público-privada.

